



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante:	Marta Dolly Mesa Gutiérrez
Demandada:	Colpensiones
Tipo de Proceso	Ordinario Laboral
Decisión:	Confirma
Radicado:	05001-31-05-019-2020-00272-01 (242) 05001310501920200027201

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos de la sustitución de poder obrante en el archivo 06SustitucionColpensiones- 02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones al doctor Didier Andrés Mesa Mora con Tarjeta Profesional 261.150 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez** y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de la demandante Marta Dolly Mesa Gutiérrez y el grado jurisdiccional de consulta concedido en favor de Colpensiones en el proceso ordinario laboral seguido por la primera en contra de la segunda respecto de la decisión adoptada por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES

La señora **Marta Dolly Mesa Gutiérrez** presentó demanda en contra de Colpensiones en la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el deceso de su cónyuge Martin Emilio Rúa Betancur, las mesadas adicionales debidamente indexadas, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

1.2 HECHOS

Para sustentar sus pretensiones indicó que convivió en unión libre con el señor Martin Emilio Rúa Betancur desde el año 2015 en unión libre, pero contrajeron matrimonio el 7 de octubre de 2017, sin mediar separación alguna y sin procrear hijos hasta el momento del deceso ocurrido el 5 de abril de 2020; agregó que el ISS, hoy Colpensiones, mediante Resolución 10468 del 28 de septiembre de 1998, reconoció pensión al causante, mientras ella estaba dedicada a las labores del hogar por lo que dependía económicamente de su cónyuge; añadió que solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero en las resoluciones SUB 121094 de 4 de junio de 2020 y SUB 157339 de 23 de julio de 2020 la entidad la negó por no acreditar la convivencia necesaria.

1.3 RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones aceptó los hechos relacionados con el matrimonio entre la señora Mesa Gutiérrez y el finado, la pensión reconocida por la entidad al señor Rúa Betancur. la fecha de su deceso, la solicitud de pensión de sobrevivientes y la negativa de la entidad a reconocerla porque en la investigación administrativa se concluyó que el pensionado no convivía con la actora. Se opuso a las pretensiones de la actora y presentó las excepciones de inexistencia de la obligación de pagar pensión de sobrevivientes, prescripción, inexistencia de la obligación de pagar

intereses moratorios, ausencia de causa para pedir, imposibilidad de condena en costas, compensación, buena fe y la innominada o genérica.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 23 de agosto de 2022, resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora MARTA DOLLY MESA GUTIÉRREZ identificada con C.C. 42.788.318, la pensión de sobrevivientes, a razón de catorce mesadas anuales, tras el fallecimiento del Sr. Martin Emilio Rúa Betancur, según se dijo en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora MARTA DOLLY MESA GUTIÉRREZ la suma de \$62.713.006 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 5 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2022, conforme se explicó en las motivaciones.

A partir del 1 de agosto de 2022, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, deberá continuar pagando a la señora MARTA DOLLY MESA GUTIÉRREZ una mesada pensional de \$1.998.471, a razón de 14 mesadas pensionales anuales, sin perjuicio de los incrementos que el Gobierno Nacional determine para el efecto. De las sumas mencionadas se autoriza los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a cancelar las sumas objeto de condena en esta sentencia, de manera indexada, teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE y la formula $VA = VH \times IPC \text{ FINAL} / IPC \text{ INICIAL}$.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción denominada “inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios” propuesta por la demandada COLPENSIONES EICE, según lo manifestado en la parte considerativa del presente proveído.

QUINTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de las restantes pretensiones incoadas en su contra por la señora MARTA DOLLY MESA GUTIÉRREZ, como se explicó con anterioridad.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada por resultar vencida en el proceso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$4.100.000.

SÉPTIMO: Por tratarse de una decisión adversa a Colpensiones como empresa industrial y comercial del estado, se ordena que se surta el grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S. En consecuencia, se ordena la remisión del expediente al H. Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral.»

II. RECURSO DE APELACIÓN y GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

2.1 RAZONES DEL RECURSO

La defensa de la actora interpuso el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia en lo relacionado al pago de los intereses moratorios, al considerar

que la administradora a pesar de conocer que el requisito de la convivencia entre la actora y el difunto estaba satisfecho, omitió reconocer la prestación, incurriendo en mora, por lo tanto, pide que se confirme la sentencia en lo referente la concesión de la prestación y se revoque parcialmente concediendo los réditos.

2.2 ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el traslado mediante auto del 19 de septiembre de 2022, **Colpensiones** presentó alegatos de conclusión, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto conforme a la investigación administrativa no se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por la actora Marta Dolly Mesa Gutiérrez, verificándose que no convivió los últimos 5 años de vida con el señor Rúa Betancur, según la información aportada la relación inició presuntamente bajo unión libre desde junio de 2015 y se casaron el día 7 de octubre de 2017 conviviendo hasta el día 5 de abril de 2020, es decir convivieron por espacio de 4 años y 10 meses. Habló de contradicciones entre las declaraciones recibidas pues algunos indicaron que la relación perduró 2 años en promedio, coincidiendo con el tiempo entre la fecha del matrimonio ocurrido el 7 de octubre de 2017 y la del fallecimiento acaecido el 5 de abril de 2020, razones por las cuales no fue reconocida la prestación e igual suerte debe correr la pretensión sobre los intereses.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y del grado jurisdiccional de consulta de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del CPTSS. No advierte la sala violación de derecho fundamental alguno, así como tampoco ausencia de presupuestos procesales que conlleven a una nulidad.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si la señora Marta Dolly Mesa Gutiérrez reúne los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes luego del deceso del pensionado Martin Emilio Rúa Betancur y en caso afirmativo determinar las

condiciones de la prestación y si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrojado, no hay duda de que, **(i)** Marta Dolly Mesa Gutiérrez nació el 12 de septiembre de 1958 y cuenta con 64 años de edad, según la cédula de ciudadanía visible a folio 13 archivo 02Demanda; **(ii)** el matrimonio con Martín Emilio Rúa Betancur se realizó el día 7 de octubre de 2017, según consta en el registro civil aportado a fl. 14; **(iii)** el pensionado falleció el 5 de abril de 2020 conforme al registro de defunción adjunto en el fl.10 archivo 02Demanda; **(iv)** la actora presentó reclamación de la pensión de sobrevivientes al fondo público, solicitud resuelta negativamente en las resoluciones SUB-121094 de 4 de junio de 2020 y SUB-157339 de 23 de julio de 2020 (fls. 16-32 Ibidem).

3.4. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Considerando la fecha del deceso del señor Rúa Betancur, ocurrido el 5 de abril de 2020, para definir el derecho pretendido se debe observar lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que establecen los beneficiarios de la prestación y los requisitos por acreditar.

Ahora, como en la Resolución 10468 del 28 de septiembre de 1998 se le otorgó al señor Rúa Betancur el estatus de pensionado, es evidente que dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues cumple los requisitos para acceder a ella de acuerdo con el alcance del artículo 46 de la Ley 100 de 1993:

ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:>
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

(...)

La discusión se concentra en esta oportunidad en definir la calidad de beneficiaria de la hoy reclamante, de acuerdo con los postulados del artículo 47 de la mencionada ley:

ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica **CONDICIONALMENTE** exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:>
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

De la norma en precedencia, la jurisprudencia especializada ha interpretado que la convivencia, por un tiempo determinado es el elemento nuclear que asegura al o la cónyuge o compañero (a) como grupo familiar del pensionado, el derecho a acceder a la referida prestación económica.

El órgano de cierre de la especialidad tiene entendida la convivencia como una comunidad de vida bajo el amparo de la ayuda mutua, el afecto entrañable, apoyo económico, asistencia solidaria y acompañamiento espiritual; que pretende realizar un proyecto de vida responsable y estable; convivencia real y efectiva (CSJ (Corte Suprema de Justicia, SL SL1399-2018), que tiene lugar cuando entre las personas en relación, existió un «[...] *vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual y económico*» (CSJ SL, 10 mayo 2005, radicación 24445), sustentado en «[...] *lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua*» (**sentencia SL1576-2019**).

En esta última providencia, se refirió al contenido material de la convivencia y explicó que «[...] *la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios*», basada en la demostración de «[...] *muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común*», siendo la demostración de este requisito por un término no inferior a cinco años, esencial para acreditar la condición de beneficiario de la sustitución pensional (CSJ SL1969 de 2019).

Entonces, la acreditación del requisito de vida en común mediante el acervo probatorio agregado legal y oportunamente al expediente, constituye el mínimo probatorio, que debe satisfacer la cónyuge/compañera supérstite para generar el convencimiento del juez en relación con el cumplimiento de los requisitos legales. En la sentencia SL4050 de 2019, la Sala de Casación laboral, al examinar el recurso

contra una providencia de este tribunal, interpuesto por una mujer que perseguía la concesión de la pensión de sobrevivientes de su cónyuge de quien estaba separada y en el cual se presentaron versiones contradictorias, hizo alusión a que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sólo procede en la medida en que el pretendiente beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de las exigencias normativas, sin que haya lugar a dudas razonables, dicho de otra forma, que satisfaga el mínimo probatorio, así explicó:

Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional. Así pues, en el ejercicio de la función judicial, el juez formará su convencimiento al punto de encontrar demostrado el hecho en función de la disposición jurídica de la cual se derivarán los efectos, a partir de los postulados que informan el derecho a la prueba -artículo 29 de la Constitución Nacional- y conforme con la regla de juicio establecida, en el caso del procedimiento laboral, por el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así pues, el estándar o mínimo estará determinado por el régimen normativo que sea aplicable a la situación jurídica que sirve de base a la controversia judicial.

En casos como este, la situación jurídica consistente en la causación de una pensión de sobrevivientes está regida por las disposiciones positivas que constituyen el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya dinámica normativa es el de la causación objetiva, es decir, que el reconocimiento de las prestaciones está condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada prestación. Es así como la pensión de sobrevivientes sólo será reconocida en la medida en que el pretendiente beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de las exigencias normativas para tal efecto.

Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un estándar probatorio de prueba necesaria.

Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró.

También debe recordarse, como se dijo en sentencias CSJ SL803 de 2022, CSJ SL3570 de 2021, CSJ SL 2090 de 2020, CSJ SL 2488 de 2020, CSJ SL 4263 de 2019, entre otras, dadas las características antes anotadas, la convivencia excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida. Así mismo, en sentencia CSJ SL100 de 2020, reiterándose CSJ SL1015-2018 y CSJ SL4099-2017, indicó que la pensión de sobrevivientes no emerge de la sola acreditación del vínculo matrimonial o de hecho que los reclamantes aseguren haber tenido con el fallecido, pues jurisprudencialmente se ha sostenido que *«...tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el término*

establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario...».

Por lo que, en el caso concreto, la señora Marta Dolly Mesa Gutiérrez debe acreditar o demostrar que hizo vida con el señor Martin Emilio Rúa Betancur por menos de cinco años en cualquier época antes de su deceso ocurrido el 5 de abril de 2020. Según esto, es dable concluir, con la prueba recaudada que, como lo afirmó la primera instancia, la reclamante demostró que residían en el mismo lugar y hacía vida con el pensionado en los cinco años anteriores a su muerte.

La afirmación de la pleiteante en su interrogatorio en cuanto a que conoció a Martín Emilio en 2014, que nunca se separaron hasta su deceso y que iniciaron la convivencia el 3 de febrero de 2015, en San Antonio de Prado, en la casa de este último, quien con anterioridad estuvo casado y convivió con su cónyuge hasta que ella falleció el 25 de enero de 2015, fue ratificada por la versión de la testigo **Luz Stella Rúa Gutiérrez**, hija del Martín Emilio Rúa Betancur, quien labora en la Policía Nacional, afirmó que conoce a Marta Dolly Mesa hace 7 años, tener conocimiento que ambos se conocieron en 2014, pero desconoce la fecha exacta, día y mes, llegó a la casa como ayuda en la casa en febrero de 2015, eso le dijeron, pero «uno no es idiota y se da cuenta de las cosas», por eso no le constaba en principio que eran pareja **porque en esos días ella estaba en el novenario de su mamá** quien había fallecido el 25 de enero de 2015, también relató que en ese tiempo ella vivía en Bogotá y que fue su hermano quien le comentó que ellos, refiriéndose a Marta y a su padre, se entienden, y luego ella veía que tenían una relación y se casaron en 2017, que la actora vivió desde febrero de 2015 en la casa paterna y no se separaron hasta el deceso del señor Martin, **que inicialmente llegó para ayudar con las tareas del hogar pero luego se enteró que tenía una relación con su padre y eran pareja**, y que compartían la habitación, afirmó no haberle conocido otra pareja a la señora Marta a excepción de su padre, de quien dependía económicamente, lo cuidó y acompañó en su enfermedad por espacio aproximado de un año y que el trato entre ambos era de pareja, lo cuidaba como su compañera; que la querellante estuvo en las exequias de su progenitor y recibió las condolencias de las personas; también relató que, luego de las honras fúnebres de su madre, ella regresó a su trabajo en Bogotá y cuando volvió 15 días después ya encontró que Marta dormía con su papá en la misma habitación que antes compartía con su madre.

Otra declaración fue la del señor **Eddy Alberto Rúa Gutiérrez**, hijo del fallecido, tiene 47 años de edad, conductor de taxi, conoce a la señora Marta Dolly hace 7 años, no le conoció ninguna pareja diferente a su padre Martin, ni a ésta, aseveró que al parecer se conocieron en San Antonio de Prado, al ser preguntado acerca de si tenían alguna relación antes de la muerte de su madre, respondió que él como conductor de taxi, en alguna ocasión los llevó a Covadonga, a un bailadero y eso sucedió otras veces; luego informó que por sus visitas frecuentes a la residencia de la pareja le consta que comenzaron a vivir los primeros días de febrero de 2015, pocos días después de haber muerto su mamá, señaló que a la casa paterna en San Antonio de Prado, llegó la señora Mesa Gutiérrez, supuestamente para ayudar en las cosas y labores de la casa, pero después se percató que había un entendimiento entre ésta y su papá, relató que él cree que desde el momento en que ella llegó a la casa ya estaban compartiendo la habitación con su papá, porque no se le reconocía ningún dinero y era pública la condición de pareja, conocida por los familiares y vecinos, no tuvo conocimiento que se hayan separado, que lo acompañó en su enfermedad, no le conoció otra pareja a ninguno de los dos, y vivieron juntos hasta el momento de su deceso, fecha para la cual llevaban 5 años de convivencia y se trataban como esposos, situaciones de las que tuvo conocimiento por cuanto visitaba la casa día por medio y los sábados, manifestó también que la actora dependía económicamente de su pareja. Durante las exequias de su padre en San Antonio de Prado, quien falleció de cáncer en la época del Covid-19, solo se le hizo la misa y Marta lo acompañó desde que lo diagnosticaron. Coincidió con la testigo anterior en que la convivencia inició en febrero de 2015, después de las exequias de su madre, pero agregó que, desde días o meses antes tenían un trato como pareja, pues se escuchaban rumores en el año 2014 y en el 2015 se concretó la vida como marido y mujer.

Finalmente, la testigo **Daniela Casas Mesa**, tiene 25 años, indicó en su relato que es hija de la señora Marta Dolly, tiene una discapacidad, que conoció al señor Martin Emilio Rúa en el año 2015, a través de su mamá, al ser interrogada acerca de qué clase de vínculo existió entre ellos, respondió «*eran esposos*», al ser indagada acerca de si la pareja vivían solos, contestó «*solo vivían ellos*» y comenzaron convivencia en febrero del año 2015, cuando su madre se lo presentó como amigos, luego se enamoraron y se fueron a vivir en la casa del señor Rúa en San Antonio de Prado, vivían solos y nunca se llegaron a separar, que al momento del deceso se realizó una misa en la iglesia de San Antonio de Prado y su madre recibía las condolencias, indicó que este falleció de cáncer, hechos de los cuales tuvo

conocimiento porque los visitaba a diario en la casa, los acompañaba a realizar vueltas, como merchar y compartía con ellos, que se casaron en el año 2017 por la iglesia y su relación era conocida por vecinos y familiares, su madre se dedicaba a las labores de la casa y dependía económicamente del señor Martín, su relación de pareja era conocida públicamente y su madre cuidó a su esposo en la casa y en la clínica durante su enfermedad, no conoció otra pareja diferente a ninguno de los dos.

Del análisis conjunto de los medios de convicción, bajo los parámetros de la sana crítica establecidos por el artículo 61 del CPTSS, conforme a lo concluido por el fallador de primer grado, se tiene que la demandante logró acreditar la carga probatoria frente al elemento material de convivencia con el pensionado, pues la prueba testimonial allegada refiere como extremo inicial de la misma, el mes de febrero de 2015 y como extremo final el día 5 de abril de 2020 tras el deceso del señor Martín Emilio Rúa, logrando poner en relieve en tal lapso una relación de pareja, con ayuda mutua y conocida públicamente por vecinos y familiares, la cual se desarrolló en el hogar ubicado en San Antonio de Prado y donde los testigos coinciden en indicar que observaron la convivencia en forma personal y directa al visitarlos reiteradamente, así como la ayuda y acompañamiento mutuo que se brindaban, el apoyo económico del difunto hacia la actora y la asistencia, cuidado, compañía que ésta le prodigó y lo socorrió durante la enfermedad que lo llevó al deceso, lo cual da cuenta de un proyecto de vida que desarrollaron juntos de manera responsable y estable y una convivencia real y efectiva.

En ese contexto, procede la sumatoria del tiempo que la actora convivió con Martín Emilio como compañera permanente y luego como cónyuge (SL3693-2021), que según los testimonios analizados superó el mínimo 5 años antes de morir, como exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Aunque los testigos aportados son hijos de la pareja, esto mero hecho no basta para restarles credibilidad, pero si deben ser analizados con mayor rigor y comparados con los demás medios de prueba aportados, porque también debe tenerse presente que precisamente por su cercanía son los llamados a conocer de primera mano el proyecto de vida común de la pareja, las incidencias propias del hogar, la ayuda y el socorro mutuo que se brindaban y la existencia de una real convivencia por el término mínimo exigido para un eventual beneficio pensional.

Fueron declaraciones creíbles, sus versiones fueron claras y coincidentes en los puntos relevantes, dieron cuenta clara de la razón de su dicho al expresar que su relato proviene del conocimiento directo de los hechos expresando, crudamente en algunos casos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la convivencia de la pareja y las condiciones particulares de su relación, ilustrando que la pareja empezó su convivencia en forma pública, al poco tiempo de producirse el fallecimiento de la primera esposa. Así las cosas, con ellos se acredita que la señora Marta Dolly y el señor Martin Emilio convivieron por más de cinco años entre febrero de 2015 y el 5 de abril de 2020, cuando falleció el último.

En la investigación administrativa o informe técnico elaborado por la empresa Consite Ltda. el 14 de mayo de 2007, por encargo de Colpensiones, se dijo *«De acuerdo a la información verificada por medio de cotejo documentación, entrevistas realizadas y labores de campo, se evidenció que los señores Marta Dolly Mesa Gutiérrez y Martin Emilio Rúa Betancur no convivieron los últimos 5 años de vida del causante»*.

En ella, se observan inconsistencias en el modo particular con que cada una de los entrevistados relató o se refirió a los hechos; pero no se aporta el detalle de las preguntas efectuadas a cada uno, o la forma en que se hizo la entrevista, lo cual adquiere relevancia dada la naturaleza de la controversia, ya que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es *«garantizar una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien[es] dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado, en vida, cotizaciones al sistema de seguridad social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece»*¹.

Pero Colpensiones atendió el informe resultante de la investigación y por eso negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin valorar correctamente las pruebas que pudo recaudar, ni expuso razones que justificaran por qué le generaba mayor convencimiento lo expresado por unos entrevistados que por otros, o de qué manera se oponía a las afirmaciones de la peticionaria. La administradora, en la resolución que negó el reconocimiento de la prestación, no valoró con imparcialidad las pruebas recaudadas, pues en lugar de definir si la accionante cumplía o no con

¹ Corte Constitucional, Sentencia SU-005 de 2018.

el requisito de dependencia económica, optó por resaltar las contradicciones entre los entrevistados, sin definir el alcance de tales imprecisiones.

Al margen de lo anterior, allí se dice que los señores Honorio de Jesús Rúa Betancur, hermano de Martín Emilio, María Eufracia Jaramillo Patiño, Ramón Emilio Patiño y Clara Inés Hurtado de Patiño, estos últimos, vecinos del sector, en el diálogo que se tuvo con ello, indicaron que conocieron a la pareja conviviendo durante dos (2) años; al paso que, la vecina María Cristina Jaramillo aseguró que conoció la convivencia de la pareja durante siete (7) años, Luz Stella Rúa Gutiérrez, hija del pensionado, al ser entrevistada, al igual que lo hizo en la declaración que rindió en el proceso, afirmó que la pareja empezó a convivir en 2015, en ese mismo sentido, se pronunció la señora Marta Rúa Betancur (hermana de Martín Emilio).

El documento, que contiene versiones encontradas requería de un análisis exhaustivo, porque de él no podía concluirse sin esfuerzo, como sucedió en el presente caso, la negativa a conceder el derecho, con asidero en las discrepancias en las fechas exactas de inicio de la convivencia entre los señores Martín y Marta de donde la enjuiciada concluyó que la convivencia comenzó en junio de 2015 y se extendió hasta el día 5 de abril de 2020, por espacio de 4 años y 10 meses y negó el derecho.

Así, el informe de investigación es una declaración más, y por lo tanto en virtud de las reglas de la carga de la prueba, le correspondía a la demandada demostrar la veracidad de las informaciones contenidas en ella, ya que ese elemento por sí solo es apenas una versión de los hechos; por lo tanto, no es suficiente para predicar el incumplimiento del requisito de convivencia, en cuya verificación la accionada debió profundizar en función de verificar la afirmación sobre la convivencia de la señora Marta Dolly Mesa con el pensionado fallecido, y ante la inexistencia de un beneficiario con mejor derecho que pueda reclamar la prestación.

En la sentencia analizada, atendiendo a las condiciones sensibles que rodearon el inicio de la vida en común, el juzgador concedió mayor credibilidad a los relatos de personas cercanas al pensionado, sus hijos, y se detuvo a analizar las vivencias de la señora Luz Stella Rúa Gutiérrez, que explicó la coincidencia y cercanía entre la muerte de su madre y esposa del pensionado y el inicio de la relación marital con la hoy litigante, incluso se dolió de ese hecho, pero relató que la pareja no tuvo separaciones, y que la cohabitación era de público conocimiento.

Debe decirse que, de la valoración de los testimonios y las documentales allegadas, no se advierte que la autoridad cuestionada desconociera el ordenamiento aplicable al asunto sometido a su criterio jurídico, toda vez que se evidencia en su decisión, un análisis razonable de la realidad fáctica, con premisas que desde ningún punto de vista lucen antojadizas, y están dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la ley.

Revisado el asunto en sede de consulta en favor de Colpensiones, a juicio de la Sala las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador se muestran coincidentes con el acervo probatorio recaudado, sin que se le haya hecho decir a la prueba algo distinto o distorsionado su contenido, es que la actora acreditó la convivencia que exige la norma, por lo que se satisfacen en sana lógica las exigencias para otorgar el derecho reclamado, imponiéndose en consecuencia la confirmación de la decisión revisada en este aspecto y se determinan las condiciones de la prestación.

3.6 PRESCRIPCIÓN

Previo a realizar la liquidación correspondiente, debe estudiarse la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones, advirtiendo que el deceso del finado se produjo el 5 de abril de 2020 y la reclamación de la sustitución pensional fue resuelta mediante resoluciones SUB 121094 de 4 de junio de 2020 y SUB 157339 de 23 de julio de 2020 y la demanda fue interpuesta el 10 de septiembre de 2020, se concluye que no trascurrió el término trienal que exige la norma para que las pretensiones aquí reclamadas sean afectadas por el fenómeno extintivo.

3.7 CUANTÍA DE LA PENSIÓN

En grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones se revisa la cuantía de la prestación, según establece el artículo 48 de la ley 100 de 1993, que el monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba. Colpensiones reconoció a Martin Emilio Rúa Betancur una pensión de vejez que en 2020 equivalía a \$1.862.152 y para el 2023 aplicado el IPC asciende a \$2.260.670, y que venía recibiendo 14 mesadas anuales, siendo estas condiciones para darse la prestación a la beneficiaria.

Ahora, la liquidación del retroactivo desde el 5 de abril de 2020 (fecha del deceso del causante) y hasta el 31 de julio de 2023 arrojando un total de **\$90.528.531**, autorizando desde ya a al fondo a efectuar los descuentos por salud del retroactivo pensional que se genere en favor de la señora Mesa Gutiérrez—artículos 143 y 157, Ley 100 de 1993.

AÑO	MESADA	No. MESADAS	VALOR RETROACTIVO
2020	\$1.862.152	10 y 26 días	\$20.235.385
2021	\$1.892.133	14	\$26.489.862
2022	\$1.998.471	14	\$27.978.594
2023	\$2.260.670	7	\$15.824.690
TOTAL, RETROACTIVO			\$90.528.531

3.8 INTERESES MORATORIOS

El ataque de la recurrente se endereza a obtener el reconocimiento de los intereses moratorios como consecuencia de la mora de la entidad en el reconocimiento de la prestación.

Según el juzgado, solo al momento de recaudar las pruebas en el proceso, es cuando se tiene claridad o certeza frente a la existencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, por lo cual, en precedencia no se había acreditado el derecho al pago de los intereses moratorios y no era posible establecer que existía el derecho al pago de aquellos, y en subsidio consideró que debía reconocerse las mesadas retroactivas debidamente indexadas.

Frente a este concepto, la jurisprudencia especializada ha adoctrinado que: “los intereses moratorios respecto de pensiones derivadas del sistema general de riesgos laborales también encuentran arraigo normativo en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 33265; CSJ SL, 14 sep. 2010, rad. 36674; CSJ SL, 9 mayo de 2010, rad. 34271 y CSJ SL 15 jul. 2020, rad. 70125). Precisamente, en la primera sentencia referida, la Corporación indicó: Frente a los intereses moratorios solicitados por la parte activa, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señala que *«A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el*

importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago».

Sobre los intereses moratorios, si bien inicialmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que estos operaban por la simple mora en el pago de mesadas, a partir de la sentencia SL 704 de 2013, se moderó esta posición para advertir que cuando la entidad actúa acatando preceptos legales sin el alcance que pueda darles la jurisprudencia en un evento determinado, no hay lugar a los referidos intereses (tesis reiterada entre otras en las providencias, SL1874-2021, SL960-2021, SL611-2021, SL454-2021 y SL1476)

Los intereses moratorios en pensión de sobrevivientes de la Ley 797 de 2003, tampoco son viables cuando se presenta suspensión del trámite por controversia entre los beneficiarios de la prestación, hasta tanto se decida judicialmente a quién corresponde, o cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un criterio jurisprudencial.

En el caso concreto, en el plenario quedó acreditado que la pretendiente solicitó la prestación económica el día 27 de abril de 2020, la cual fue negada por la entidad mediante acto administrativo del 4 de junio de 2020, por no considerar acreditado el requisito de la convivencia, hecho que fue desvirtuado, por lo que en este asunto procede el reconocimiento de tales intereses a partir del cumplimiento del plazo legal de dos (2) meses contados desde la reclamación administrativa, en aplicación del artículo 1º de la Ley 797 de 2001, toda vez que COLPENSIONES negó sin justificación alguna el reconocimiento del derecho pensional a la suplicante, quien satisfizo los requisitos para ser beneficiaria; y el análisis que la entidad de seguridad social hizo del requisito de convivencia durante el trámite de la investigación administrativa, que fue parcial, en cuanto solo se apoyó en unas declaraciones extraprocesales de vecinos que nunca aportó y que no se encuentra justificación para el desconocimiento y pago de la pensión desde que fue solicitada, por lo que Colpensiones incurre en mora desde el 27 de junio de 2020 y hasta el momento efectivo del pago.

Por lo que se revocará el fallo de primer grado en este punto, al igual que la indexación ordenada por corresponder ambas sanciones a una misma causa, esto es, la devaluación, debiéndose concluir que son incompatibles.

4.0 COSTAS PROCESALES.

No hay condena en costas en esta instancia por haber salido adelante el recurso de la demandante. Las costas de primera instancia estarán a cargo de Colpensiones, tásense por el juez de instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley,

V. DECIDE:

PRIMERO: REVOCAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de agosto de 2022, para en su lugar condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de los intereses moratorios desde el 27 de junio de 2020 y hasta el momento efectivo del pago, conforme lo indicado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ